



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

**Medellín, veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés
(2023)**

Demandante: GUSTAVO OSORIO SÁNCHEZ
Demandados: OCTAVIO RESTREPO CASTAÑO y CALES DERIVADOS DE LA
SIERRA S.A.
Radicado: 05001 31 05 003 2019 00784 01
Decisión: A-037

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra del auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el día 22 de julio de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante auto escrito, aprobado previamente por los integrantes de la Sala.

A N T E C E D E N T E S:

En el proceso de la referencia, rotulado como de regulación de honorarios, en audiencia del 22 de julio de 2022, dentro de la etapa de decisión de excepciones previas, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín declaró probada la de cosa juzgada propuesta por el apoderado de CALES Y DERIVADOS DE LA SIERRA S.A. EN

LIQUIDACIÓN, teniendo en cuenta la existencia de una decisión adoptada por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES el 24 de enero de 2018, confirmada el 12 de marzo del mismo año, mediante las cuales fijó los honorarios de los liquidadores saliente (el demandante) y entrante (codemandado).

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con lo decidido, el apoderado del demandante presentó recurso de apelación, indicando que si bien no es objeto de discusión que la Superintendencia de Sociedades cumple funciones administrativas, pero por disposición legal también cumple funciones jurisdiccionales, lo cierto es que el despacho omite valorar y referirse específicamente a los elementos estructurales que tiene que cotejar y decir si la sentencia o el auto proferido por la Superintendencia de Sociedades en su ámbito de juez jurisdiccional, tiene alcance de sentencia y si dentro del mismo se dan los elementos del artículo 303 del Código General del Proceso para establecer que hay cosa juzgada; como se expresó anteriormente la identidad de partes no se da y al no haber identidad de partes no hay razón para que el despacho determine que hay cosa juzgada.

No aplica ni se establecen los elementos de la cosa juzgada para llegar a declarar su configuración; ninguno de los elementos del artículo 303 se dan con respecto a esa decisión. No existía parte demandada y por ende no puede hablarse de identidad de partes.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término del traslado para alegar concedido a las partes, el apoderado del demandante hizo uso de su oportunidad legal indicando que el Juez de primera instancia no realizó ninguna valoración para establecer la configuración de la cosa juzgada en los términos del artículo 303 del Código General del Proceso. Esa decisión de la

Superintendencia de Sociedades no corresponde a una sentencia judicial que pueda ser equiparada a efectos de dar aplicación a la cosa juzgada, sin que se dé ninguno de los elementos normativos para su procedencia ya que no hubo una demanda y por ende no hay partes, no hubo hechos, pretensiones o debate jurídico alguno.

CONSIDERACIONES:

El proceso, entendido como el conjunto de actos concatenados, observados por las partes y por el juez para la solución de un litigio, en razón a su finalidad específica y concreta cual es la de buscar la efectividad de los derechos subjetivos, no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo y, por tanto, extenderse a perpetuidad.

Como respuesta a ese imperativo, surge la institución procesal de la **cosa juzgada**, la cual hace referencia a los efectos jurídicos de las sentencias en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear otra vez el litigio, ni emitir un nuevo pronunciamiento. Ahora bien, para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada, se requiere que concurren, en ambos juicios, 3 requisitos comunes: (i) identidad de objeto, (ii) identidad de causa e (iii) identidad de partes.

Las llamadas "identidades procesales" constituyen, entonces, los límites a la existencia de la cosa juzgada. Así lo dispone el artículo 303 del Código General del Proceso al señalar que la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, *"siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes"*.

En el presente caso, el funcionario de primer grado encontró probada la excepción previa de cosa juzgada, procediendo en consecuencia a declarar la terminación del proceso. Lo anterior con sustento en el artículo 29 de la Constitucional Nacional y en el hecho de que el Juez competente para resolver la situación que plantea el demandante es el propio Juez del concurso o liquidación, el cual tiene el mismo nivel de jerarquía de un Juez del Circuito.

Ahora bien. Es claro que la propia Constitución Política permite en su artículo 116, que, excepcionalmente, determinadas autoridades administrativas puedan cumplir funciones jurisdiccionales según les sean atribuidas por la ley, salvo para adelantar instrucción de sumarios o juzgar delitos. En este orden, la Ley le ha otorgado a la Superintendencia de Sociedades la facultad de asumir diversas funciones jurisdiccionales, con efectos decisorios de los que gozaría cualquier sentencia judicial. Esto es, se busca el aprovechamiento de la especialidad de funcionarios administrativos de la Super Sociedades, para dirimir asuntos de naturaleza societaria, que se caracterizan por involucrar aspectos técnicos especializados, financieros, económicos, administrativos, etc. De suerte que sus decisiones están revestidas del valor de una providencia judicial, que, por tanto, no podrán volver a controvertirse ante un juez de la República.

En el presente caso, se tiene que la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del “*PROCESO DE **LIQUIDACIÓN JUDICIAL***” de la sociedad CALES Y DERIVADOS DE LA SIERRA S.A., mediante auto N° 610-000967 del 29 de mayo de 2012, y designó, en el mismo auto, como liquidador al Sr. GUSTAVO OSORIO SÁNCHEZ, advirtiendo que sus honorarios “... se atenderán en los términos el artículo 67 de la ley 1116 de 2006 y en concordancia con el Decreto 962 de 2009”

Posteriormente, según consta en Acta 400-001327 del 24 de junio de 2016, se dispuso remover al citado liquidador, y en su lugar,

mediante Auto 400-009837 fue designado como liquidador el Sr. OCTAVIO RESTREPO CASTAÑO, quien a través de memorial del 15 de noviembre de 2017 solicitó, al interior del trámite de liquidación judicial en mención, la fijación de honorarios del proceso.

Así las cosas, por medio de Auto 400-001015 del 24 de enero de 2018, en efecto, el Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia procedió de conformidad, asignando como valor de honorarios en favor del liquidador entrante, OCTAVIO RESTREPO CASTAÑO, la suma de \$757.257.871 IVA incluido, y del liquidador saliente, GUSTAVO OSORIO SÁNCHEZ, la suma de \$84.139.763 IVA incluido. Lo anterior con apego a lo normado en el artículo 18 del Decreto 962 de 2009:

“El auxiliar de la justicia removido será objeto de exclusión de la lista y tendrá derecho a un pago mínimo como remuneración, el cual corresponderá al monto determinado por el Juez del concurso según el avance de las etapas del proceso de reorganización en término de meses, o de las de liquidación judicial y al cual adicionalmente le serán aplicables, las reglas referentes a gastos del proceso, establecidas en este decreto.”

Decisión ésta que fue objeto de recursos tanto de reposición como de apelación por parte del ahora demandante; el funcionario competente no repuso su decisión y se abstuvo de conceder la apelación con base en que *“... de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1116 de 2006 “El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia”; disposición que es reiterada además en el artículo 24 del C.G.P.”*

Visto esto, la Sala considera que, si bien no se observan unos hechos ni unas pretensiones para confrontar la identidad de causa y objeto, o bien un demandante y un demandado propiamente dicho en el proceso de liquidación judicial, en el fondo, el punto específico a decidir propuesto en el presente proceso, fue ciertamente y

materialmente resuelto en el proceso jurisdiccional adelantado por la Superintendencia de Sociedades. Es evidente que es éste un trámite reglado por disposiciones diferentes a las que regulan cualquier otro proceso judicial, más, no por ello, deja de ser un proceso jurisdiccional seguido al cobijo de la Constitución y la ley, cuyas decisiones adquieren el valor de la inmutabilidad.

Con respecto a la noción de la cosa juzgada, vale recordar el siguiente apartado jurisprudencial, que permite reforzar la anterior conclusión:

“(...) por lo que hace al instituto de la cosa juzgada, cumple advertir que con dicha figura se obtiene ante todo la inmutabilidad del resultado procesal obtenido con una sentencia, el cual, al imponerse como imperativo a los litigantes y al juez, da al litigio entre las partes una terminación mediante una declaración de certeza que impide que nuevamente sea planteado el asunto ya resuelto, autoridad que se extiende, en materia civil y salvo contadas excepciones, tan sólo a quienes fueron parte en el proceso. Pero para que se predique una autoridad con tal extensión la doctrina y explícitamente el Código de Procedimiento Civil en su artículo 332, requieren que en el segundo proceso en el que se pretenda replantear el litigio que fue ya decidido en el primero, se presente, con respecto a éste último, una triple identidad de partes, objeto y causa. Por lo que hace a la primera — límite subjetivo — ha dicho la Corte que “se refiere no a la identidad personal de los sujetos involucrados, sino a su identidad jurídica, y su fundamento racional se encuentra en el principio de la relatividad de las sentencias, que por vía general vincula a quienes fueron partes en el proceso, a sus sucesores mortis causa o a sus causahabientes por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro, o al secuestro en los demás casos” (Cas. Civ. Exp. C-5591, feb. 26/2001).

Pero es indudablemente en el denominado límite objetivo, desdoblado en el objeto de la pretensión y en la causa de pedir, en donde más se presentan los problemas tendientes a dilucidar si el segundo proceso replantea un litigio ya decidido en el primero. Con relación al límite objetivo, la Corte ha

explicado que si “bien es cierto... hoy resulta indiscutible que el límite objetivo de la cosa juzgada, lo forman en conjunto, el objeto y la causa de pedir, también lo es que no siempre es fácil escindir lo que es materia de decisión en la sentencia, o sea su objeto en sí mismo considerado, y la razón o motivo de la reclamación de tutela para un bien jurídico, desde luego que se trata de dos aspectos íntimamente relacionados entre sí. De ahí porque sea recomendable examinar tales dos cuestiones como si se tratara de una unidad para determinar de esa forma en todo el conjunto de la res iudicium deductae, tanto la identidad del objeto como la identidad de causa: sobre qué se litiga y por qué se litiga” (sent. ago. 20/85, CLXXX, 302).

Como pauta interpretativa, dijo la Corte en la aludida sentencia de 2001 que “desde el punto de vista objetivo, la cosa juzgada sólo comprende las cuestiones que efectivamente fueron resueltas, porque ciertamente fueron propuestas, y las que resultan decididas de contera, ya porque las expresamente falladas las conllevan, ora porque lógicamente resultan excluidas y por ende implícitamente definidas. Por contrapartida, no constituye cosa juzgada material las cuestiones que a pesar de haber sido propuestas no fueron decididas expresamente, como acontece con los fallos inhibitorios (C.P.C., art. 333, num. 4º), y las que no se entienden implícitamente resueltas, por no corresponder a la naturaleza y objeto jurídico del proceso, así todo lo que se diga y considere tenga relación con la cuestión realmente propuesta y decidida, porque lo contrario implicaría desconocer caros derechos fundamentales, como el debido proceso y la legítima defensa”. (Sala de Casación Civil - Corte Suprema de Justicia, sentencia 6999 del 30 de octubre de 2002)

Para la Sala, tiene razón el señor vocero judicial de la demandada cuando al sustentar la excepción correspondiente, indica que “El caso objeto de estudio ya fue resuelto por la Superintendencia de Sociedades en su condición de Juez del Concurso, en los términos del Auto 400-001015 del 24 de enero de 2018, radicado 2018-01-020283, confirmado mediante Auto 400-003792 del 12 de marzo de 2018, radicado 2018-01-

089140, los cuales se encuentran ejecutoriados y hacen tránsito a cosa juzgada en los términos del artículo 303 del C.G.P"

Consecuentemente, se mantendrá la decisión de primera instancia.

Costas en esta instancia, en contra de la parte vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se tasan en la suma de \$1.116.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMA el auto proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el día 22 de julio de 2022.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Lo resuelto se ordena notificar en anotación por ESTADOS.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 32
del 24 de febrero de 2023.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **565a70352b0fe44eda9611fa7b3d320fdb4636992c142dcb87e41629e70605bf**

Documento generado en 23/02/2023 03:53:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>